Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional, Dr. Hernán Siles Zuazo

Excelentísimo señor Presidente del Honorable Congreso Nacional.

Honorables Senadores Nacionales y Diputados de la República.

Honorable Cuerpo Diplomático.

Señores Ministros de Estado.

Señores Comandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Boliviana.

Pueblo boliviano:

Cuando el 10 de octubre asumimos el mando de la República por expresa voluntad del pueblo boliviano y el consenso de todas las fuerzas democráticas del país, teníamos clara conciencia de que se había llevado a Bolivia al borde de su destrucción. En esas circunstancias asistimos a la acción convergente y decidida de las fuerzas sociales, comprometidas con el destino de la Nación Boliviana, como la alternativa más eficaz para lograr el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

El proceso democrático que vivimos es fruto de la lucha heroica y denodada de los mineros, campesinos, fabriles, profesionales, maestros, universitarios, militares y empresarios patriotas y, en fin, del pueblo todo de Bolivia. Por ello, la democracia que estamos construyendo adquiere una proyección histórica.

En efecto, se trata ahora de transformar el país y reabrir el cauce de su desarrollo en un marco de soberanía e independencia, libertad y participación de las masas populares organizadas, así como de beneficio real para las mayorías.

Porque somos consecuentes con nuestras convicciones democráticas, nos dirigimos a la nación a través de este Congreso Nacional. Sabemos que muchos de ustedes Honorables Senadores y Diputados, han padecido por su lucha en defensa de los principios democráticos y por ello les expresamos nuestro público reconocimiento. Es obvio que quienes en las horas difíciles estuvieron junto al pueblo contra la dictadura, sabrán defender la democracia, postergando intereses personales o de partido.

Aunque las causas que determinaron la situación de desastre nacional heredadas del pasado reciente no son un secreto para nadie, conviene recordar brevemente los factores determinantes de la agudización actual de la crisis. Así se podrá comprender mejor la naturaleza del nuevo orden político, económico y social que nos proponemos establecer así como la orientación y alcances de las medidas económicas de emergencia que a partir de hoy entran en ejecución.

1964 marca el inicio de sucesivos intentos por imponer al país un modelo económico, político y social orientado a liquidar el proceso de la Revolución Nacional, iniciado el 9 de abril de 1952. Estos intentos con la excepción de los regímenes de Siles Salinas, Ovando Torres, Guevara y Gueiler, alcanzan su mayor despliegue durante el régimen instaurado en agosto de 1971 y se repiten en 1980 bajo formas violentas y delictivas que son el reflejo de su decadencia estructural. Utilizando el recurso del asalto armado al poder, las fuerzas impulsoras del "modelo" antinacional y antipopular se proponían, fundamentalmente, la denacionalización progresiva del Estado y de la economía nacional, en función de los intereses de una nueva oligarquía orgánicamente ligada al imperialismo.

Los instrumentos principales de este esquema fueron el extremo endeudamiento externo, la irracional explotación de nuestras materias primas, la apropiación privada de recursos públicos y la utilización de las empresas y mecanismos estatales como fuente de enriquecimiento de la oligarquía dependiente.

En lo social se recurrió a la superexplotación de la fuerza laboral del país. Esta política inhumana se trataba en el interior permanente del poder adquisitivo de sueldos y salarios, así como en el conglamerado de los precios de la producción campesina.

El proyecto "modelo" exigía necesariamente un régimen autoritario y represivo para neutralizar o aniquilar la reacción organizada del pueblo. A este efecto se adoptaron medidas como la proscripción de los sindicatos, partidos políticos y toda otra forma de organización popular y democrática.

La acción desnacionalizadora y delictiva de las bandas paramilitares constituyó la manifestación exacerbada del terrorismo de Estado, al que tuvo que recurrir la dictadura para sostenerse.

Finalmente la corrupción pasó a convertirse en parte sustancial del régimen, sirviendo de factor de cohesión dolosa de las camarillas beneficiarias del sistema.

Los sucesivos intentos de aplicación del esquema antinacional, condujeron a Bolivia a la actual situación del desastre. Pocos países del mundo pueden mostrar en su historia reciente un caos similar al que existía en el nuestro, hasta el 10 de octubre.

Al deterioro político y moral se suma una crisis económica de tal gravedad, que se tornó incontrolable para las dictaduras que se arrogaron la soberanía del pueblo.

Constituye una obligación hacer pública la deplorable situación en que nuestro Gobierno ha recibido el país; que se conozca quienes son los verdaderos responsables de los sufrimientos padecidos en los últimos tiempos y del sacrificio que tenemos por delante.

Debemos referirnos, en primer lugar, a los problemas de la deuda externa y del comercio exterior.

En las arcas del Banco Central no encontramos un sólo dólar utilizable. Por aún, dicha entidad estaba sobregirada en 400 millones de dólares. Este dato demuestra hasta que punto la dictadura debilitó nuestra estructura económica.

La deuda externa pública que debemos pagar a corto plazo supera los 400 millones de dólares y la total sobrepasa los 3.000 millones de dólares.

El año pasado se renegoció dicha deuda procurando conseguir mayores plazos para pagarla y, sin embargo, estamos en mora con casi todos los acreedores.

En los años 1983 y 1984 los pagos por concepto de amortización e intereses de la deuda externa de vencimiento y largo plazo, superan los 600 millones de dólares, lo cual representa cerca de un 70% del actual ingreso nacional por exportaciones. Si a esta cifra se agrega el interés de la deuda pública y privada de corto plazo, resulta comprometido cerca del 90% de las divisas provenientes de las exportaciones quedando solo un 30% para importaciones y atención de nuestras necesidades.

El establecimiento del cambio flotante a principios de año provocó un verdadero caos cambiario. Nuestro deterioro país boliviano sufrió en ocho meses una devaluación próxima al 1.000%, fomentándose la incertidumbre, la especulación y una inflación desenfrenada. Los precios de los productos importados se multiplicaron varias veces, incluisive algunos artículos de primera necesidad como los medicamentos.

El entonces régimen gobernante procuró equilibrar las cuentas externas mediante una disminución drástica de las importaciones de materias primas y de bienes de capital.

La aplicación de esa política paralizó la actividad económica sin conseguir equilibrar el agudo desajuste externo.

En segundo lugar, en los meses transcurridos durante este año, el Producto Interno Bruto caerá estimativamente en un 10% y la inversión está hoy prácticamente paralizada.

Los productores carecen de muchos de los bienes importados que necesitan para el funcionamiento de sus empresas, y sufren dificultades adicionales provocadas por la caída de la demanda y los problemas financieros. Correlativamente, el deterioro de los ingresos reales provocado por la inflación, deprimió la demanda considerablemente. El endeudamiento en dólares, ofrecido y desembolsado de manera irresponsable, sumado a la situación, ha llevado a muchas empresas a enfrentar graves dificultades financieras. En algunos casos se utilizó el endeudamiento en dólares como método para encubrir la fuga de capitales. Por ello, existen empresarios con cuentas bancarias en el exterior, que poseen en el país empresas aparentemente al borde de la quiebra. Pero tampoco caben dudas de que una parte de las empresarias está atravesando hoy por circunstancias difíciles.

Sin embargo, son más graves aún los padecimientos de los que menos tienen. Los ingresos reales de los sectores populares han caído notablemente como consecuencia de la política antipopular aplicada por las dictaduras a lo que se une un desempleo creciente.

En tercer lugar, el sector público ha tenido en los últimos años un desempeño económico que se puede calificar de vergonzoso. Por un lado, los ingresos fiscales se redujeron de manera apreciable, a tal punto que la renta interna real no alcanzará en 1982 a la mitad de la que se obtuvo en 1981, mientras que las liberaciones aduaneras subieron del 33% a un 57%. La evasión impositiva se convirtió en una norma y las regalías aduaneras bajaron apreciablemente.

El Gobierno Central perdió el control de los recursos obtenidos por las empresas públicas.

Por otro lado, los gastos fiscales se expandieron desmesuradamente debido sobre todo al aumento indiscriminado del empleo en el sector público, a la política de subsidios que el Estado entregaba para mantener reducidos los precios de los productos básicos y al servicio de la deuda externa.

Este manejo irresponsable de los ingresos y de los gastos del Estado condujo a un creciente déficit fiscal: en septiembre pasado los gastos duplicaron a los ingresos. Podemos afirmar, que al asumir el mando, el déficit fiscal y la inflación estaban totalmente fuera de control.

En cuarto lugar, la enorme diferencia entre los precios subsidiados de algunos productos y los precios liberados de otros, en especial de los importados, junto a la fuerte devaluación, crearon un campo fértil para la especulación interna y el contrabando a los países vecinos. Es cierto que los precios subsidiados favorecen a los sectores populares, pero no es menos evidente que en las controles adecuados, favorecen más a los especuladores y a los contrabandistas.

Uno de los efectos más trágicos para los intereses nacionales, del modelo dictatorial, se registró en el sector estatal de la economía. La minería nacionalizada incrementó sus pérdidas en un 52% entre 1980 y 1982. La Empresa Nacional de Fundiciones vio afectada su liquidez, hajo la enorme presión de su cuantiosa deuda externa.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, acusó en el primer semestre del año en curso un déficit de 149 millones de dólares, equivalente al 22% de sus ingresos presupuestarios.

Peru en el campo social donde la política antipopular de los regímenes de facto se expresó con mayor dureza. La desocupación abierta, en el segundo semestre de 1982, era 67% mayor que en 1980. En lo que se refiere a la salubridad, la situación ha derivado a extremos tan alarmantes como ilusorios. Apreciaciones estimativas nos muestran que las tasas de morbilidad y mortalidad infantil, a consecuencia de la desnutrición creciente y la insuficiente atención médico-sanitaria, acusa incrementos que nos colocan en el nivel de los países más pobres del mundo.

Junto a los problemas económicos y sociales, se dan otros que contribuyen a agravarlos y complicarlos.

El Estado mismo se ha convertido en un problema que está lejos de ser el instrumento idóneo que sería necesario para llevar adelante la recuperación nacional.

Esta situación es fruto de muchos factores entre los que adquirió un peso especial el ingreso a la Administración Estatal de personas sin las calificaciones necesarias, tanto en capacidad como en moralidad, para el manejo de la cosa pública.

Pero no sólo la ineficiencia y la corrupción impidieron un buen desempeño del Estado. Las dictaduras militares agravaron profundamente el problema al la desestructuración estatal, haciendo difícil realizar una acción coherente y orgánica. La centralización total impuesta al espíritu democrático que anima a nuestro Gobierno, pero la descentralización exagerada e inconexa impide que exista una dirección firme de los asuntos públicos, como lo requiere la hora crítica por la que pasa el país. La mayoría de los organismos centralizado controlan menos del 30% del Presupuesto General de la Nación, mientras que los descentralizados absorben más del 70% restante. Las instituciones descentralizadas deben tomar conciencia de que son parte del Estado, así como las regiones deben comprender que forman parte de la Nación.

Al cabo de 18 años la política económica de los regímenes dictatoriales, advertimos también que el Estado careció de una política económica de largo alcance. La visión estrecha y miope de dichos regímenes padeció el espejismo de la coyuntura de momento y los problemas financieros. Correlativamente, el deterioro de los ingresos reales provocado por la inflación, deprimió la demanda considerablemente. El endeudamiento en dólares, ofrecido y desembolsado de manera irresponsable, sumado a la situación, ha llevado a muchas empresas a enfrentar graves dificultades financieras. En algunos casos se utilizó el endeudamiento en dólares como método para encubrir la fuga de capitales. Por ello, existen empresarios con cuentas bancarias en el exterior, que poseen en el país empresas aparentemente al borde de la quiebra. Pero tampoco caben dudas de que una parte de las empresarias está atravesando hoy por circunstancias difíciles.

Sin embargo, son más graves aún los padecimientos de los que menos tienen. Los ingresos reales de los sectores populares han caído notablemente como consecuencia de la política antipopular aplicada por las dictaduras a lo que se une un desempleo creciente.

En tercer lugar, el sector público ha tenido en los últimos años un desempeño económico que se puede calificar de vergonzoso. Por un lado, los ingresos fiscales se redujeron de manera apreciable, a tal punto que la renta interna real no alcanzará en 1982 a la mitad de la que se obtuvo en 1981, mientras que las liberaciones aduaneras subieron del 33% a un 57%. La evasión impositiva se convirtió en una norma y las regalías aduaneras bajaron apreciablemente.

El Gobierno Central perdió el control de los recursos obtenidos por las empresas públicas.

Por otro lado, los gastos fiscales se expandieron desmesuradamente debido sobre todo al aumento indiscriminado del empleo en el sector público, a la política de subsidios que el Estado entregaba para mantener reducidos los precios de los productos básicos y al servicio de la deuda externa.

Este manejo irresponsable de los ingresos y de los gastos del Estado condujo a un creciente déficit fiscal: en septiembre pasado los gastos duplicaron a los ingresos. Podemos afirmar, que al asumir el mando, el déficit fiscal y la inflación estaban totalmente fuera de control.

En cuarto lugar, la enorme diferencia entre los precios subsidiados de algunos productos y los precios liberados de otros, en especial de los importados, junto a la fuerte devaluación, crearon un campo fértil para la especulación interna y el contrabando a los países vecinos. Es cierto que los precios subsidiados favorecen a los sectores populares, pero no es menos evidente que en las controles adecuados, favorecen más a los especuladores y a los contrabandistas.

Uno de los efectos más trágicos para los intereses nacionales, del modelo dictatorial, se registró en el sector estatal de la economía. La minería nacionalizada incrementó sus pérdidas en un 52% entre 1980 y 1982. La Empresa Nacional de Fundiciones vio afectada su liquidez, bajo la enorme presión de su cuantiosa deuda externa.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, acusó en el primer semestre del año en curso un déficit de 149 millones de dólares, equivalente al 22% de sus ingresos presupuestarios